102

Prescripción del derecho de acusar por delito exceptuado.

Recurso de nulidad interpuesto por Simón Silva, en la causa que le sigue don Manuel Rossel, por estupro. — Procede de Lima.

DICTAMEN FISCAL

Excmo. Señor:

I

Está plenamente probado que el autor del hecho que se juzga es Simón Silva y que la menor Plácida, nacida el 3 de octubre de 1891, es el fruto de las relaciones criminales que mantuvo con María Rossel. Sea que se tome como fecha inicial para contar con el término de la prescripción del derecho de acusar, el 5 de diciembre de 1890 o el 8 de febrero de 1891, como respectivamente lo sostienen la agraviada y el acusado en sus declaraciones de fojas 6 y 8 y en el careo de fojas 64, resulta, aun en el caso más desfavorable para Silva, que el delito se cometió en los primeros días de febrero de 1891; de donde resulta que el 17 de junio del propio año, fecha en que se interpuso la querrela de fojas 2, es-

taban vencidas con exceso los cien días que la ley requiere para que quede extinguido el derecho de acusar por delitos en que no es forzosa la intervención del Ministerio Público. El acusador sabía sin duda que estaba prescrito el derecho que ejercitaba, y por esa razón es que se guardó de indicar en la querrela el día en que se cometió el delito.

La excepción de prescripción propuesta por el Procurador del reo a fojas 86, está, pues, fundada en los artículos 95 y 97 del Código Penal, que no pueden ser ciertamente más terminantes.

El derecho de acusar prescribe—dicen estos artículos—por los delitos en que no debe intervenir el Ministerio Fiscal, a los cien días entre presentes, y al año entre ausentes; y el término comienza a contarse, para las acusaciones, desde el día en que se cometió el delito.

La presente cuestión se reduce, según esto, a una sencillísima operación aritmética, o lo que es lo mismo, a determinar si desde el 8 de febrero de 1891 al 17 de junio del mismo año, han trascurrido o no cien días.

II

La Ilustrísima Corte Superior de Lima, declarando sin lugar la excepción propuesta por el Procurador del reo, impone a éste, en la sentencia de fojas 91, la pena de carcel en 3er. grado, término máximo, con sus accesorias, y la obligación de dotar a María Rossel y alimentar a la menor Plácida, en proporción a sus facultades; y alega, como único fundamento de este fallo condenatorio, que no constando «que don Ma-

nuel Rossel haya sabido el desfloramiento de su menor hija cien días antes de la interposición de la querrela, no puede perjudicarle el término de la prescripción».

Semejante teoría es inadmisibile en derecho, Excmo. Señor; porque, bien examinada, tiende nada menos que a cerrar el paso a la prescripción del derecho de acusar, dando lugar a que puedan promoverse juicios por delitos que solo afectarán a las generaciones que pasaron. La sociedad representaría entonces la horrible imagen del caos.

Felizmente para los buenos principios, la cuestión va a ser resuelta por V. E.

El término de la prescripción del derecho de acusar empieza a contarse, según las palabras mismas de la ley, *desde que se comete el delito*, y no como lo sostiene el Superior Tribunal, desde que el agraviado tenga conocimiento del hecho punible.

Los términos del artículo 97 del Código Penal no pueden ser más absolutos; y harto sabido es que, conforme a una máxima de justicia universal, nadie debe distinguir donde la ley no distingue, y, mucho menos, cuando, como en el presente caso, se establece tan arbitraria distinción, atropellando otra máxima, también de justicia universal, de que lo odioso debe restringirse y lo favorable ampliarse.

La prescripción del derecho de acusar se opera por el mero trascurso del tiempo, de manera que, vencido el término de ley sin haberse interpuesto la acción criminal, el delito debe reputarse como si no se hubiese cometido, para los efectos del castigo. Nada importa, según esto, que el agraviado haya tenido o no, oportunamente,

noticia de la perpetración del delito, desde que semejante circunstancia no es elemento constitutivo de la prescripción.

La prescripción, como fundada en la naturaleza de las cosas, constituye un principio de orden público; y tanta es su importancia, que la Iglesia la llama en uno de sus cánones *patrona de la humanidad*. Dada la naturaleza de este medio de defensa, la ley le acuerda, justamente, el privilegio de poder ser opuesta *en cualquier estado de la causa*, a diferencia de las demás excepciones, que solo pueden deducirse dentro de términos breves y perentorios.

La legislación colonial reconocía también este mismo principio, si bien establecía un tiempo mayor para la prescripción de la acusación. Todos los pleitos buenos o malos, *si fueren algún pecado*—dice una ley del Fuero Juzgo—*si non fuesen demandados fasta treinta annos, dallí adelante non sean demandados*.

Hace, pues, cuatrocientos años que rige en el Perú este principio, y seguramente continuará rigiendo hasta la consumación de los siglos, porque los principios de eterna verdad y absoluta justicia tienen que imperar en todos los pueblos de la tierra que quieran vivir en forma humana.

Los tiempos acortarán o alargarán los términos de la prescripción, según el estado social de cada pueblo; pero el principio en sí no variará jamás. Cualquiera que sea el término que se prefije, es indudable que una vez vencido, no puede intentarse la acción, por grande que haya sido la perturbación causada por el delito en el orden social.

III

Si Simón Silva está exento de la responsabilidad criminal, por haberse acogido a la prescripción, no lo está de la civil. Está probado, en efecto, que es el autor del hecho que se juzga, y que la menor Plácida fué el fruto de sus criminales relaciones con María Rossel, a quien hizo madre a la temprana edad de diez y seis años, profanando su virginidad.

La responsabilidad civil del delito consiste, en el presente caso, en la obligación de dotar a María Rossel y alimentar a la hija de ambos, todo en proporción a sus facultades.

IV

El fallo de vista está, pues, arreglado a ley, en esta parte.

En mérito de las precedentes consideraciones legales, el Ministerio Fiscal es de sentir que hay nulidad de la sentencia de vista de fojas 91; y que V. E., reformándola en parte, debe declarar que Simón Silva está exento de responsabilidad criminal por el delito materia de este juicio, y que no la hay en lo demás que dicha sentencia contiene.

V. E. resolverá, sin embargo, lo que en su justificación considere más arreglado a derecho.

Lima, 20 de junio de 1893.

ALBARRACÍN.

RESOLUCIÓN SUPREMA

Lima, 1º de diciembre de 1893.

Vistos; de conformidad con el dictamen del Ministerio Fiscal, cuyos fundamentos se reproducen: declararon haber nulidad en la sentencia de vista de fojas 91, su fecha 5 de diciembre del año próximo pasado, en cuanto declarando sin lugar la excepción de prescripción, deducida por el procurador del reo a fojas 83, le impone la pena de reclusión en tercer grado término máximo, y sus accesorias; y reformándola en esta parte, declararon fundada dicha excepción: declararon no haber nulidad en lo demás que dicha sentencia de vista contiene; y los devolvieron.

Loayza — Espinosa — Lama — Quiroga — Solar.

Se publicó conforme a ley; de que certifico.

LUIS DELUCCHI.

Cuaderno No. 207. — Año, 1893.